
EL PAIS

EDICIÓN
IMPRESA

ARCHIVO

SÁBADO, 3 de marzo de 1984

VIOLENCIA TERRORISTA EN EL PAÍS VASCO Y EN EL SUR DE FRANCIA

Los supuestos implicados en el asesinato de Hendaya afirman pertenecer a los GAL y haber actuado por "razones patrióticas"

FERNANDO ORGAMBIDES | Madrid | 3 MAR 1984

Archivado en: Guerra sucia | Cuerpo Superior Policía | II Legislatura España | Cuerpo Nacional Policía | Ministerio del Interior | GAL | Gobierno de España | Francia | Ministerios
Atentados terroristas | Policía | Europa occidental | Legislaturas políticas | Política antiterrorista | PSOE | Fuerzas seguridad | Europa | ETA | Lucha antiterrorista | Gobierno

Cuando habían transcurrido más de 36 horas desde la detención de los supuestos autores del atentado en Hendaya contra el ferroviario francés Jean Pierre Leiba, el Gobierno español mantiene total silencio, aunque duda sobre el origen de este extraño grupo de cuatro personas y sus presuntas conexiones con la guerra sucia contra ETA. Sin embargo, se sabe que los detenidos, que afirman pertenecer a los Grupos Antiterrorista de Liberación (GAL), han manifestado haber actuado por "razones patrióticas". La policía no le ha dado credibilidad a esta afirmación y ha centrado sus sospechas en "un trabajo sucio a sueldo".

Fuentes del Ministerio del Interior, por su parte, señalaron que no podían adelantar ninguna información porque ello "podría interferir la marcha de las investigaciones". La policía, no obstante, tiene pruebas de que al menos uno de los detenidos participó en el atentado. En este sentido ayer trascendió que a estas cuatro personas les fueron ocupadas varias armas cortas, entre ellas una pistola, y un importante material fotográfico. Las versiones policiales coinciden, en cierto modo, con las primeras manifestaciones expresadas el jueves por el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, quien en los pasillos del Congreso comentó que los detenidos aseguraban pertenecer a los GAL, aunque dudó de que así fuera. Guerra estaba presumiblemente informado con puntualidad, por el ministro del Interior, José Barrionuevo, de las primeras averiguaciones policiales, máxime cuando hasta las seis de la tarde del jueves ejercía como presidente del Gobierno, en sustitución de Felipe González, de viaje en Oriente Medio.

Felipe González, a su llegada a Barajas, donde fue recibido e informado por Alfonso Guerra, no quiso expresar sus sospechas sobre los posibles autores del atentado, y se limitó a afirmar lo que los detenidos habían revelado, al parecer, a la policía. La frase del presidente del Gobierno fue la siguiente: "Ellos dicen que son de los GAL".

Las personas que están siendo interrogadas en la comisaría de Irún son Mariano Moraleda Muñoz, Daniel Fernández, Juan Luis García y Vicente Manuel Fernández. Sólo sobre uno de ellos, Mariano Moraleda, de 27 años, se ha podido averiguar que tiene numerosos antecedentes penales y es muy conocido entre la policía guipuzcoana por delitos (robos y atracos a mano armada) realizados años atrás en esta provincia. Dos de los detenidos, Moraleda y Fernández, fueron capturados en la frontera, mientras el resto fue localizado en sus domicilios.

Informaciones oficiosas de la policía, basadas en datos proporcionados por los detenidos en los interrogatorios a que están siendo sometidos, apuntaban el supuesto de que Jean Pierre Leiba pudiera ser un doble colaborador, por un lado de ETA y por otro de los cazarrecompensas, probablemente españoles, que desde el mes de diciembre vienen actuando de forma criminal en suelo francés.

Este extremo, que no ofrece apenas credibilidad y que puede haber sido presentado por los detenidos para crear confusión, se contradice completamente con los datos periodísticos obtenidos sobre Leiba, una persona ajena a los círculos donde se desenvuelven los refugiados vascos y relacionado con personas que ni siquiera comparten posiciones nacionalistas. También difiere de las manifestaciones de miembros de la cuadrilla de amigos de Leiba, que se encuentran consternados con el asesinato y no pueden comprender lo sucedido, salvo que se trate de "un lamentable error" de los asesinos.

Una quinta persona

Horas después de que fueran detenidos, primero el supuesto autor de los disparos, al parecer Mariano Moraleda, de 27 años, y posteriormente sus otros tres compañeros, circularon las primeras versiones, siempre procedentes de la policía española, de que al menos uno de ellos podría haber confesado que actuaba por dinero y que con antelación a la ejecución del crimen había mantenido una cita con un desconocido que le había fijado el objetivo y, probablemente, la cantidad a percibir por "el trabajo sucio".

También ha circulado, siempre según informaciones procedentes de funcionarios policiales, la supuesta existencia de una quinta persona relacionada con el asesinato y que ha podido eludir la acción de los investigadores españoles y franceses. Se da la circunstancia de que fue la propia policía francesa la que puso en antecedentes a sus colegas de Irún de la presunta vinculación de la persona que cruzó la frontera con los autores del atentado.

La policía francesa solicitó la entrega en el mismo puesto fronterizo del presunto autor de los disparos, a lo que se negó el responsable de la comisaría de Irún. Este policía, sin embargo, inició las primeras diligencias, para lo que sometió a interrogatorio al detenido, y después de sus declaraciones ordenó que se procediera a detener a las otras tres personas.

El bar Hendayais

El caso más similar al ocurrido el jueves fue el del atentado contra el bar Hendayais (que provocó dos muertos y diez heridos), ocurrido en noviembre de 1980. En aquella ocasión, los supuestos autores del atentado (tres personas cuya identidad nunca fue revelada) cruzaron la frontera y fueron retenidos en la comisaría de Irún. Allí ofrecieron un número de teléfono, que era el correspondiente al entonces comisario general de Información, Manuel Ballesteros.

Éste, que siempre ha negado haber tenido relación con aquellas personas, puso el hecho en conocimiento del entonces ministro del Interior, Juan José Rosón, y los detenidos fueron puestos en libertad. Meses después circuló una versión que apuntaba la posibilidad de que las personas que cruzaron la frontera eran antiguos colaboradores de la Policía española, especialmente del que fuera máximo responsable de la lucha antiterrorista, Roberto Conesa.

Lo cierto es que, a pesar de la orden de puesta en libertad, a los pocos días el entonces gobernador civil de Guipúzcoa, Pedro de Arístegui, destituyó de su puesto al comisario-jefe de las dependencias fronterizas, precisamente la oficina a la que fueron trasladados los sospechosos del atentado contra el bar Hendayais.